

Conflictos intra-élite y reformas agrarias en contextos de apertura democrática

Diego Fernando Martínez Vallejo, profesor asistente en dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, dfmartinezv@unal.edu.co

Resumen

Esta ponencia analiza la relación entre conflictos intra-élite, reformas agrarias y procesos de democratización. La investigación concluye que los conflictos intra-élite pueden generar oportunidades para la implementación de reformas agrarias, corroborando hallazgos previos de otros autores. Esto se debe principalmente a que, durante los procesos de modernización, los conflictos entre las élites propician que los terratenientes pierdan su influencia ante otros sectores de poder. Este panorama crea oportunidades para que actores como las élites políticas, respaldadas por las élites empresariales, impulsen cambios significativos en las políticas de distribución de tierras. El estudio se centra en El Salvador, un caso particularmente pertinente dada su historia caracterizada por conflictos intra-élite y reforma agraria en contextos de apertura democrática. La nación experimentó tensiones notables entre las élites económicas, especialmente terratenientes, y otros sectores de poder, generando oportunidades para reformas agrarias de gran alcance. La metodología adoptada se basa en un enfoque cualitativo que integra el *Process Tracing* (rastreo de procesos) y el análisis histórico. El *Process Tracing* se emplea para examinar los mecanismos causales que vinculan los conflictos intra-élite, las reformas agrarias y los procesos de democratización. Paralelamente, el análisis histórico contextualiza y compara patrones a lo largo del tiempo y en diversos contextos, enriqueciendo así el análisis. La triangulación de ambas metodologías robustece la validez y la profundidad de la explicación, proporcionando una visión más completa de las complejas interrelaciones entre los fenómenos estudiados.

I. Introducción

El análisis sobre los conflictos entre terratenientes y élite empresarial ha sido un tema de recurrente estudio en las ciencias sociales. Estos conflictos revelan complejas estructuras de poder presentes en la élite económica que ejercen un impacto significativo en el sector

agrícola. Comprender estos conflictos resulta esencial para el entendimiento del desarrollo rural, el análisis de la distribución de la tierra y las estrategias de poder en contextos agrarios. Las contiendas por la dominación de la tierra y de los recursos naturales estructura el poder, reconfigurando la organización política dominante y moldeando las interacciones entre los actores implicados.

Este artículo examina el impacto de los conflictos entre la élite económica, particularmente entre terratenientes y empresariado, en la redistribución de tierras. Además, examina cómo estos conflictos generan oportunidades para el avance de la democracia al socavar la capacidad de acción colectiva de las élites para resistir movimientos redistributivos y alentar un cambio en las preferencias políticas del empresariado, pasando de posturas autoritarias a democráticas. Esta investigación se centra en analizar el impacto de los conflictos entre las élites terratenientes y empresariales en la redistribución de tierra en entornos de apertura democrática¹.

En este sentido, la pregunta de investigación que guía este trabajo gira en torno al análisis de cómo estas tensiones internas dentro de la élite económica pueden incidir en la posibilidad de que se abran ventanas de oportunidad para la implementación de reformas agrarias durante procesos de transición y consolidación democrática. Partiendo de este análisis, la hipótesis de esta investigación postula que los conflictos entre élites empresariales y terratenientes aumentan la probabilidad de que se conciban e implementen reformas agrarias extensivas durante fases de transición, apertura o consolidación democrática. En otras palabras, se sostiene que los conflictos intra-élite incrementan no solo la probabilidad de una mayor apertura política y de que la democracia se consolide, como sugiere la famosa tesis de Barrington Moore (2002), sino que también incrementan la probabilidad de que emerjan procesos amplios de redistribución de tierras, una demanda recurrente de las clases populares en contextos democráticos.

II. La teoría: modernización y conflicto entre las élites

¹ Esta tesis, entre otras, es tratada también en mi libro *The Threat of Redistribution under Democracy* (Martínez Vallejo, 2021).

La modernización es un proceso complejo y multifacético que ha transformado profundamente las estructuras económicas, sociales y políticas de los países (Huntington, 1991; Moore, 2002). En términos económicos, la modernización implica una economía que comienza a diversificarse y que reduce su dependencia hacia el sector agropecuario. A su vez, la innovación tecnológica y el desarrollo de infraestructuras permite la expansión de la industria, que poco a poco se va convirtiendo en un motor fuerte del crecimiento económico. A diferencia de las economías agrarias, donde las tareas suelen ser menos diferenciadas, con el desarrollo industrial y de servicios, la producción en masa y la complejidad de los servicios requieren una fuerza laboral que pueda desempeñar roles técnicos, lo que impulsa una mayor especialización del trabajo y una reconfiguración de los sistemas educativos para adaptarse a las nuevas demandas del mercado (Huntington, 1991).

La modernización económica suele estar acompañada por la urbanización y avances tecnológicos (Rostow, 1960). Sin embargo, los beneficios de la modernización no se distribuyen uniformemente, lo que lleva a cambios en la estructura social y al surgimiento de actores económicos y sociales, así como nuevos grupos de interés. Por ejemplo, la industria tecnológica puede dar origen a empresarios y profesionales, mientras que el declive de sectores tradicionales como la agricultura puede desplazar a los trabajadores hacia nuevas industrias o al desempleo (Schumpeter, 1942). Los conflictos pueden surgir cuando los intereses de estos nuevos grupos se encuentran en oposición o cuando los recursos son limitados. Por ejemplo, la movilidad rural-urbana puede ser vista positivamente por quienes se movilizan del campo a la ciudad, pero negativamente por los residentes que pueden verse desplazados (Smith, 2001). Esta tendencia a la diferenciación de roles y valores conlleva al surgimiento del conflicto, el cual es inherente en los procesos de modernización. Como señala Lipset (1990, p. 254), “endémico en todas las sociedades post-agrarias es el conflicto entre los sectores más y menos modernos, lo cual se explica por las tendencias de expansión del sector moderno. (..) [Debido a esto] el conflicto quizás se siente más a nivel de las élites”. En consecuencia, un sistema social complejo resulta inherentemente inestable (Lipset, 1985).

En las teorías de la modernización, el conflicto entre terratenientes y empresarios ha sido un tema central. Según Moore (2002), la lucha por el poder entre terratenientes y

empresarios industriales ha sido una constante en la formación de los regímenes políticos y económicos. Moore argumenta que estos conflictos reflejan la lucha por el poder económico y político dentro de las sociedades agrarias en transición hacia la industrialización, lo cual posibilita también la apertura democrática. Desde la perspectiva de la teoría económica clásica, David Ricardo (1817) enfatizó la divergencia de intereses entre terratenientes y empresarios industriales. Según Ricardo, esta tensión se origina en las diferencias fundamentales en sus fuentes de ingresos: los terratenientes dependen de la renta de la tierra, mientras que los empresarios buscan maximizar las ganancias a través de la inversión y la producción. Así, el conflicto entre terratenientes y empresarios no solo es un choque de intereses económicos, sino también un reflejo de las dinámicas de poder y las aspiraciones divergentes dentro de las sociedades en sus distintos periodos históricos.

Conflicto entre élites, democracia y políticas redistributivas

El conflicto intraélite es resultado también de la lucha por el poder político. Dentro de un contexto democrático, esta lucha puede generar dinámicas complejas que influyen significativamente en las políticas de redistribución. En este escenario, la presión y demanda de las masas juegan un papel crucial, actuando como catalizadores para la implementación de políticas que favorecen la redistribución de la tierra. Los conflictos entre las clases dominantes pueden desencadenar cambios significativos en las políticas estatales, como señalan Moore (2002) y Tilly (1990). Así mismo, las demandas populares pueden no solo influir, sino también dirigir la política pública hacia la redistribución de recursos (Dahl, 1989).

En contextos de desigualdad pronunciada o crisis económica, movimientos campesinos pueden exigir reformas agrarias como una medida para reducir la disparidad económica y mejorar sus condiciones de vida. Estas demandas pueden obligar a los industriales a alinearse con ellos o a utilizar la situación como una oportunidad para negociar concesiones con los terratenientes. En este sentido, la apertura democrática puede exacerbar el conflicto, creando a su vez ventanas de oportunidades para la redistribución. En otras palabras, el conflicto puede propiciar condiciones políticas y sociales favorables para cambios sustantivos en la estructura distributiva de la propiedad. Si los industriales logran ganar

influencia política pueden -como estrategia política - promover reformas agrarias que redistribuyan la tierra para consolidar su poder político, incluso a costa del interés de los terratenientes.

III. Metodología

Para responder a la pregunta sobre cómo los conflictos dentro de la élite económica, particularmente entre terratenientes e industriales, pueden incidir en la posibilidad de que se abran ventanas de oportunidad para la formulación e implementación de reformas agrarias durante procesos de transición y apertura democrática se hará uso de un estudio de caso: El Salvador de 1970 a 1992. Este estudio se enfoca en El Salvador como caso de estudio específico, seleccionado por su idoneidad para confirmar la teoría presentada. Es importante tener en cuenta que si bien los estudios de caso pueden ser útiles para refutar o cuestionar teorías, también tienen limitaciones en cuanto a su capacidad de generalización y pueden estar sujetos a sesgos confirmatorios. Por consiguiente, este artículo no pretende ofrecer una teoría generalizable. Más bien, busca proporcionar un marco teórico que pueda ser utilizado como base para abordar problemas similares en otros contextos. La intención es que esta teoría pueda servir como punto de partida para reflexionar sobre el problema en diversas situaciones y para la construcción de teorías que puedan ser sometidas a prueba en contextos diferentes al que se presenta en este estudio.

Por otra parte, la investigación hace uso de la técnica de rastreo de procesos o *Process tracing*, técnica que consiste en seguir sistemáticamente el rastro de variables específicas a lo largo de un proceso o evento, permitiendo identificar patrones, causalidades y mecanismos subyacentes. Esta metodología, ampliamente utilizada en ciencias sociales y estudios políticos, se enfoca en desentrañar la secuencia temporal de eventos y decisiones para comprender mejor los fenómenos estudiados. Al analizar de manera detallada cómo ciertos factores interactúan y cómo influyen en los resultados observados, el *process tracing* proporciona una visión más profunda y contextualizada de los procesos investigados, contribuyendo así a un análisis más riguroso y fundamentado.

El rastreo de procesos es una herramienta analítica para extraer inferencias causales a partir de pruebas diagnósticas, a menudo entendidas como parte de una secuencia temporal de eventos o fenómenos (Collier, 2011). El término “rastreo de procesos” se originó en la psicología cognitiva de los Estados Unidos a finales de la década de 1960 (Bennett & Checkel, 2014). En esta disciplina, particularmente, el rastreo de procesos se relaciona con las observaciones que se hacen a las personas previo a la toma de sus decisiones. Así, desde sus inicios, el rastreo de procesos se concibió a partir de la idea de que es posible rastrear en la vida del individuo el proceso causal que lleva a que él o ella tome y efectúe una decisión cualquiera (Schulte-Mecklenbeck et al., 2017). En la ciencia política, el rastreo de procesos hizo mella gracias a Alexander George y Andrew Bennett (George & Bennett, 2005), quienes han jugado un rol primordial en el desarrollo de este método. En esta disciplina, el rastreo de procesos involucra la secuencia causal de observaciones que lleva al entendimiento de procesos diversos que van desde la toma de formulación e implementación de una política pública hasta el entendimiento de fenómenos complejos como las transiciones democráticas, las guerras civiles, las revoluciones políticas y los movimientos sociales, entre otros.

El rastreo de procesos tiene, en esencia, cuatro bondades, a saber: i) permite el entendimiento de la secuencia de los eventos al pretender describir el proceso causal que involucra diferentes factores y cuya combinación permite múltiples resultados, ii) combina con efectividad el deductivismo y el inductivismo para que la teoría progrese; iii) brinda luces para el entendimiento de los mecanismos causales, estudiados con entusiasmo por la filosofía de la ciencia; y iv) permite el uso de coyunturas críticas para entender los efectos de variables y mecanismos en el fenómeno que se estudia.

IV. Estudio de caso: El Salvador. 1970-1990

El Salvador, un país pequeño en Centroamérica, experimentó significativas transformaciones económicas durante la segunda mitad del siglo XX. Este período estuvo marcado por una serie de reformas internas y externas que influyeron en la estructura económica del país, enfrentando al mismo tiempo retos significativos que incluyeron conflictos internos y cambios políticos. Durante los años 60 y 70, El Salvador comenzó un

proceso de diversificación económica, pasando de una economía predominantemente agraria a una más industrializada. La reforma agraria, aunque limitada, fue un paso significativo en este proceso. Paralelamente, el país experimentó un crecimiento en la manufactura, especialmente en la producción de textiles y alimentos procesados. Este crecimiento fue en parte impulsado por la inversión extranjera y las políticas de promoción industrial que incluyeron incentivos fiscales y la creación de zonas francas (López Pérez, 1984).

El período de modernización económica en El Salvador también estuvo profundamente afectado por el conflicto armado interno que duró desde 1980 hasta 1992. Este conflicto, que enfrentó al gobierno contra varios grupos guerrilleros, tuvo un impacto devastador en la economía. La infraestructura fue destruida y la inversión extranjera se redujo significativamente (Martínez-Peñate, 2003). A pesar de estos desafíos, el fin del conflicto en 1992 con los Acuerdos de Paz de Chapultepec abrió nuevas oportunidades para la modernización económica. Estos acuerdos incluyeron reformas estructurales que buscaban mejorar la democracia y la distribución de recursos (Torres Rivas, 2018). Posterior a los acuerdos de paz, El Salvador implementó varias reformas económicas neoliberales. Durante la administración de Armando Calderón Sol en la década de 1990, se privatizaron numerosas empresas estatales y se liberalizó el mercado (Martínez-Uribe, 2018).

Las élites terratenientes en El Salvador

El desarrollo económico y social de El Salvador durante el siglo XX estuvo fuertemente influenciado por una elite agraria que dominó los sectores más cruciales de la economía, especialmente la producción de café. Desde principios hasta mediados del siglo XX, el café no solo fue el principal producto de exportación de El Salvador sino que también configuró la estructura social y política del país. En los años cincuenta, este producto representaba más del 80% de las exportaciones totales, llegando a su pico en la década de los cincuenta cuando representó el 88.4% de las exportaciones entre 1950 y 1954 (Bulmer-Thomas, 1987). Sin embargo, a pesar de una leve reducción en la participación dentro del PIB a lo largo del tiempo, hasta la década de los ochenta el café representó el mayor peso en la economía del país.

La participación del café en las exportaciones totales experimentó una disminución significativa en 2002, año en el que el café no representaba más del 4.9% de la economía salvadoreña. Este cambio se atribuye a una combinación de factores internos y externos, incluyendo la competencia creciente de países en Asia y África desde la década del noventa (Bates, 1997; International Coffee Organization, 2021) y la dependencia creciente del sector de servicios. Esta transición marcó una reconfiguración profunda de la economía salvadoreña, donde el café perdió su lugar preponderante, dejando al país como un productor mediano en el contexto global.

Además del café, el algodón y la caña de azúcar jugaron roles importantes en la agricultura de El Salvador. La producción de estos cultivos estuvo también dominada por las mismas familias que controlaban el café. Este fenómeno refleja la concentración de poder económico y la diversificación dentro de la misma elite terrateniente. Por ejemplo, 12 de las 26 familias más importantes en la producción de café también dominaban la producción de algodón (Cardenal, 1996). Sin embargo, hacia finales del siglo XX, la producción de algodón sufrió una disminución drástica debido a las reformas agrarias y otros factores socioeconómicos (González & Romano Martínez, 1999). Por otro lado, la caña de azúcar aumentó su importancia, representando un 4.5% de las exportaciones en 2014, cifra similar a la de 1970. La reforma agraria alteró la distribución de los ingresos generados por este cultivo, beneficiando en mayor medida a las cooperativas y productores independientes formados durante este periodo (Pratt & Pérez, 1997).

La élite industrial y de servicios de El Salvador

El desarrollo de la élite empresarial en El Salvador es un fenómeno que se ha ido configurando a lo largo de diversas décadas, marcado principalmente por las políticas de industrialización y los cambios socioeconómicos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Durante el tiempo de posguerra, la incapacidad de los países en desarrollo para suministrar productos manufacturados a nivel mundial favoreció la expansión de empresas textiles en Latinoamérica, incluido El Salvador. La implementación del modelo ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones) en la década de 1940 propició la creación de un sistema industrial destinado a reemplazar los productos importados por

bienes manufacturados localmente (Gordon, 1989). La creación del Instituto Salvadoreño de Fomento a la Producción (INSAFOP) en 1955 y su posterior transformación en el Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI) en 1961, marcó un compromiso estatal hacia la expansión del sector industrial, diversificando la producción agrícola e incentivando la inversión privada (CEPAL, 1956; Gordon, 1989; Vásquez, 1961).

Aunque el modelo ISI estaba conceptualmente diseñado para beneficiar a la oligarquía cafetalera, también tuvo implicaciones en el surgimiento de grupos emergentes. Entre ellos, se destacan los productores de algodón, quienes, a pesar de que inicialmente estaban cercanos a la oligarquía cafetera, invirtieron en la industria textil y química, especialmente en fertilizantes e insecticidas, lo que fomentó un crecimiento industrial notable entre 1950 y 1960 (Cardenal, 1996; Gordon, 1989). El impulso industrial también fue promovido por el Mercado Común Centroamericano (MCCA), acuerdo establecido en 1960, así como por la importación de insumos fuera de la región que continuó siendo alta (Bulmer-Thomas, 1987). A pesar de los desafíos, para la década de 1980, los industriales se habían convertido en un grupo poderoso, impulsando un cambio estructural hacia los servicios y la industria (Segovia, 2002; Velázquez Carrillo, 2012).

La llegada al poder del empresario Alfredo Cristiani (1989-1994), a finales de los años ochenta, marcó un punto de inflexión con la promoción de políticas neoliberales. La creación de Fundación Salvadoreña para el Desarrollo FUSADES y la reprivatización del sistema bancario nacional fortalecieron un oligopolio financiero, que se benefició enormemente de las remesas y expandió su influencia más allá de los sectores financieros hacia el comercio y la industria (Robles Rivera, 2010; Segovia, 2002). Para finales del siglo XX, la élite empresarial salvadoreña había adquirido una dimensión transnacional significativa. Grupos como TACA - Avianca Holdings y el grupo Poma-Salaverría-Quirós expandieron sus operaciones a varios países de América Latina y Estados Unidos, enfocándose en sectores como la construcción, la importación de vehículos y la gestión de centros comerciales y hoteles (Velázquez Carrillo, 2011). Así las cosas, la élite empresarial de El Salvador ha mostrado una notable capacidad de adaptación y transformación desde mediados del siglo XX. Desde sus inicios, ligados a la industria agroexportadora, hasta el momento actual, esta élite empresarial, cuyo enfoque ha privilegiado la

transnacionalización y la diversificación sectorial, ha jugado un papel crucial en la configuración económica del país. Este dinamismo es reflejo de una estrategia que ha sabido capitalizar tanto las políticas internas como las tendencias globales, redefiniendo su rol dentro y fuera de El Salvador.

Conflicto entre las élites terrateniente y empresarial

El conflicto entre las élites terratenientes, productoras de café, y la emergente burguesía industrial y de servicios en El Salvador, ha sido un tema ampliamente estudiado en la historiografía contemporánea del país. Este enfrentamiento, que se desarrolla a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y se agudiza en el contexto de la guerra, es crucial para comprender los cambios políticos y económicos que eventualmente condujeron a la democratización de El Salvador y al final de la guerra civil en 1992. La fragmentación de la élite económica, un fenómeno descrito en los trabajos de Baloyra (1982) y Stanley (1996), se identifica como un factor determinante en el proceso de democratización de El Salvador. Este fenómeno se evidencia en el traspaso de apoyo de las élites militares y políticas de la oligarquía cafetalera a la burguesía emergente. Dicha transición se manifiesta claramente durante las reformas implementadas por Junta Revolucionaria de Gobierno (la segunda junta), que redujeron significativamente el poder e influencia de la oligarquía cafetera en el escenario nacional (Cardenal, 2002).

La guerra civil exacerbó el conflicto de larga duración entre grupos insurgentes y el Estado, realineando la estructura de la élite nacional. Los costos incurridos por la guerra, tanto reales como de oportunidad, sumados a la gran incertidumbre económica, hicieron insostenible la continuidad del conflicto, empujando al sector empresarial a adoptar una postura más conciliadora en las negociaciones de paz de principios de los 90 (Pastor & Boyce, 2000; Wood, 2000). Es evidente que, durante este período, se observa una moderación del discurso de las principales organizaciones empresariales del país respecto a la guerra civil, y su eventual apoyo a un pacto negociado con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en ese momento la guerrilla de izquierda que aglutinaba a varios sectores campesinos.

La transformación de la élite económica es notablemente impulsada por la ausencia de los miembros más influyentes de la élite terrateniente en organizaciones relevantes en la economía salvadoreña como la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, y la ya mencionada FUSADES, muchos de los cuales optaron por el exilio (Cardenal, 1996; Wood, 2003). Además, la Asociación Salvadoreña de Café (ASCAFÉ) perdió relevancia frente a la Asociación de Beneficiadores de Café (ABECAFE), que empezó a representar más a los procesadores del grano y no a los productores tradicionales (Paige, 1997).

Menjívar (1986) y Spalding (2014) destacan cómo la burguesía adoptó y promovió una ideología económica liberal, reflejando un cambio significativo en comparación con la conservadora élite cafetalera. Este cambio ideológico no solo se evidenció en las políticas gubernamentales que favorecían la liberalización y la apertura económica, sino también en la aceptación y promoción de las negociaciones de paz con el FMLN, visto en la moderación del discurso de las organizaciones empresariales durante y después del conflicto (Paige, 1997). La guerra civil salvadoreña y las subsiguientes reformas políticas realinearon las alianzas dentro de la élite. Según Wood (2003), las reformas introducidas por la junta revolucionaria, y más tarde por los gobiernos de Duarte (1984-1989) y Cristiani (1989-1994), fueron cruciales para disminuir el poder de la élite cafetalera tradicional. La pérdida de influencia se vio acentuada por el exilio significativo de miembros de esta élite y la disminución de su representación en organizaciones clave como ANEP y FUSADES (Cardenal, 2002). Robinson (2003) agrega que la globalización y la integración de El Salvador en la economía mundial facilitó este desplazamiento, al abrir el país a nuevas dinámicas comerciales y financieras que beneficiaron a la burguesía.

Bajo la presidencia de Alfredo Cristiani (1989), se observa un giro ideológico en la burguesía hacia una economía más liberal, en contraste con la postura más conservadora de la élite cafetalera. Este cambio ideológico es fundamental para entender el apoyo del empresariado a las políticas de liberalización y reforma económica que desfavorecieron al sector agrario pero que beneficiaron a los sectores industrial y de servicios (Velázquez Carillo, 2011). Las políticas neoliberales, respaldadas por organismos internacionales y gobiernos extranjeros, transformaron la base económica del país, incentivando la inversión en sectores no tradicionales y desplazando los intereses de la élite cafetalera.

El período de post-guerra vio un incremento significativo en la influencia del empresariado, especialmente con la implementación de políticas neoliberales que incluyeron privatizaciones, liberalización del comercio y reformas fiscales. Estas políticas, aunque controversiales, facilitaron la emergencia de un nuevo modelo económico que benefició principalmente a la clase empresarial (Velázquez Carrillo, 2011). El conflicto entre las élites terratenientes y los empresarios industriales y del sector de servicios en El Salvador durante la segunda mitad del siglo XX no solo reconfiguró la economía y la política del país, sino que también marcó el declive de un modelo oligárquico agrario y el ascenso de una nueva élite más diversificada y alineada con el capital transnacional. Este proceso no solo refleja las transformaciones internas de El Salvador, sino también las tendencias globales de cambio económico y político. La historia salvadoreña de este período revela cómo las estructuras económicas y políticas, internamente fragmentadas y en constante evolución, pueden influir decisivamente en los rumbos de un país.

Las consecuencias de estas transformaciones fueron profundas. La burguesía, menos afectada por la guerra en términos de sus activos físicos, emergió con una capacidad mejorada para influir en la política y la economía. En contraste, la élite cafetalera enfrentó desafíos significativos debido a la depreciación de sus activos y la pérdida de control sobre las políticas agrícolas y de exportación (Pastor & Boyce, 2000). Este cambio también se manifestó en el creciente apoyo popular y electoral hacia el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), una agrupación de derecha que progresivamente desplazó a otros grupos políticos. ARENA se consolidó como el partido que representaba principalmente los intereses del empresariado, distanciándose así de la alineación tradicional con la élite cafetera (Bull et al., 2014).

Apertura democrática y redistribución de la tierra

La historia de El Salvador en el siglo XX está marcada por intensos conflictos sociales y políticos, reflejando una lucha constante entre distintos grupos de poder, entre ellos los terratenientes y la burguesía emergente. Este apartado profundiza en cómo estas tensiones contribuyeron tanto la democratización de El Salvador como a un proceso redistributivo

significativo de la tierra. Para ello, el apartado se enfoca en eventos cruciales desde el golpe de Estado de 1979 hasta los Acuerdos de Paz de 1992.

Durante gran parte del siglo XX, El Salvador estuvo dominado por una oligarquía de terratenientes que controlaba las principales exportaciones del país, principalmente el café. Este grupo ejerció su poder no solo en la economía sino también en la política, manteniendo estructuras tradicionales que limitaban cualquier forma de modernización política o económica (Dunkerley, 1994). En contraste, a partir de la década de 1960, comenzó a surgir una clase empresarial urbana que buscaba diversificar la economía salvadoreña y promover una mayor apertura hacia los mercados internacionales. Este grupo (élite empresarial, o si se quiere, burguesía empresarial), favorecía las reformas económicas y políticas que podrían disminuir el poder de los terratenientes y abrir el país a la inversión extranjera y al comercio internacional.

El golpe de estado de 1979, liderado por jóvenes oficiales del ejército, representó un momento crucial en la historia salvadoreña. Aunque inicialmente contó con el apoyo de sectores progresistas, rápidamente se convirtió en el preludio de una violenta guerra civil. Este golpe fue parcialmente motivado por las presiones internas y externas para modernizar el país y reducir la influencia de la oligarquía terrateniente. La junta militar que tomó el poder implementó una serie de reformas, incluyendo una reforma agraria que buscaba redistribuir las tierras de los terratenientes. Estas medidas, aunque limitadas, fueron vistas por la burguesía como una oportunidad para acelerar la transición hacia un modelo económico moderno y menos dependiente del agro (Bulmer-Thomas, 1987).

La expansión redistributiva

El proceso de reforma agraria en El Salvador durante las décadas de 1970 y 1980 marcó un período significativo de cambio socioeconómico y político. Inicialmente, bajo la presidencia de Arturo Armando Molina (1972-1977), se propuso una reforma agraria que buscaba redistribuir las tierras de los grandes propietarios a los campesinos sin tierra, quienes habían aumentado en número debido a su retorno de Honduras (Artiga-González, 2015; Montgomery, 1982). Esta propuesta enfrentó la oposición de poderosas asociaciones

como FARO, ANEP y ANDI, quienes bloquearon efectivamente la reforma (Artiga-González, 2015; Montgomery, 1982; White, 2009).

En respuesta a las crecientes tensiones sociales y políticas, se establecieron el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) en 1975 y el Primer Distrito de Transformación Agraria en 1976. Estas instituciones llevaron a cabo una reforma modesta que afectó 58,744 hectáreas, incluyendo la hacienda más grande del país, La Carrera (Artiga-González, 2015). El golpe militar de 1979 marcó un cambio significativo en la política de reforma agraria, con líderes reformistas tomando el poder dentro de una Junta Militar (Haggerty, 1990). A pesar de la continuación de algunos sectores estatales que apoyaban a la elite cafetalera, la presión externa y la guerra civil liderada por el FMLN obligaron a adoptar reformas más sustanciales.

La reforma agraria se planeó implementar en tres fases. La Fase I, iniciada en marzo de 1980, implicó la expropiación de propiedades mayores a 500 hectáreas, aunque permitía a los propietarios retener hasta 150 hectáreas (Cardenal, 2002). La Fase II, que nunca se implementó, habría afectado propiedades entre 100 y 500 hectáreas. La Fase III permitió que cada arrendatario pudiera eventualmente poseer hasta siete hectáreas tras un período de pago de 30 años (Cardenal, 1996; Goitía, 1991; Thome, 1984). Entre 1983 y 1989, más de 655,710 hectáreas de tierra fueron distribuidas a 158,032 familias, siendo la Fase III la más efectiva en términos de redistribución (Goitía, 1991). A pesar de que la Fase II, que habría impactado directamente a los propietarios de cafetales, afectó a un grupo de 136 grandes productores de café (Cardenal, 2002)

Además de la reforma agraria, el gobierno decretó la nacionalización del comercio exterior, terminando el monopolio privado sobre el procesamiento del café y buscando reducir la fuga de capital (Pérez-Brignoli, 2011). El Instituto Nacional del Café (INCAFE) fue creado para implementar esta nueva política, reemplazando a la Compañía Salvadoreña de Café (Coscafe). Aunque inicialmente INCAFE procesaba una porción significativa del café, su participación disminuyó gradualmente hasta solo el 3.8% en 1983-84 (Cardenal, 2002). La reforma agraria y la nacionalización del comercio exterior tuvieron un impacto directo e indirecto en la estructura de la industria cafetalera, perjudicando principalmente a los propietarios y productores de café. Este proceso transformó el paisaje agrícola y económico

de El Salvador, marcando un cambio significativo en la distribución del poder político y económico del país.

Debe tenerse presente aquí que, a pesar de implementarse una reforma agraria, en cuanto a la distribución de ingresos el país sufrió un revés en 1995. El incremento continuo de las remesas, que alcanzaron los 1,374 millones en 1998, no fue suficiente para mantener la mejora en la distribución del ingreso. Las políticas económicas implementadas durante la administración de ARENA, particularmente bajo la presidencia de Cristiani, jugaron un papel crucial en este cambio. Cristiani eliminó el impuesto a la propiedad de grandes estancias, redujo a la mitad el impuesto sobre la renta y disminuyó los aranceles, mientras que el IVA, el impuesto más regresivo, aumentó gradualmente (Boyce & Pastor, 2000, p. 388). Esta situación refleja cómo, a pesar de los avances temporales, las políticas neoliberales favorecieron a la burguesía y contribuyeron a una redistribución del ingreso menos equitativa.

La apertura democrática

La transición hacia la democracia en El Salvador es un tema de interpretaciones diversas, pero muchos coinciden en que el golpe militar de 1979 marcó un antes y un después significativo en la historia política salvadoreña. A este evento le siguieron dos procesos cruciales: las elecciones pluralistas de 1984, que permitieron la participación de varios partidos políticos después de años de un sistema político cerrado, y la firma del Acuerdo de Paz en 1992, que consolidó el control civil sobre los militares, marcando una nueva era en la política salvadoreña (Artiga-González, 2015; Cardenal, 1996; Dunkerley, 1994; Lazo, 1992).

La junta militar salvadoreña de principios de los 80 jugó un papel crucial en este proceso al permitir la apertura de nuevos partidos políticos. Esta apertura llevó a las elecciones de 1982 para formar una Asamblea Constituyente, desplazando la Constitución de 1962. En estas elecciones, los partidos ARENA y el PCN obtuvieron la mayoría de los escaños, y la Asamblea eligió a Alvaro Magaña como presidente, quien sirvió hasta 1984. Bajo su presidencia, se promulgó una nueva constitución y se aprobó una nueva ley electoral, lo que

permitió elecciones presidenciales directas (Artiga-González, 2015, p. 138; Bulmer-Thomas, 1987, p. 234; C. White, 2009, p. 103). Estos cambios sentaron las bases para un sistema político más inclusivo y representativo.

Con las elecciones de 1984, El Salvador experimentó su primera apertura política significativa en décadas. José Napoleón Duarte, del Partido Demócrata Cristiano, se convirtió en presidente en un contexto de guerra civil. Duarte fue elegido democráticamente con un discurso que apuntaba a mantener el financiamiento estadounidense hacia el ejército salvadoreño y hacia una mayor apertura política. Su gobierno intentó equilibrar los intereses de diferentes grupos, incluyendo terratenientes y empresarios, mientras buscaba apoyo internacional para estabilizar el país (Artiga-González, 2015). Aunque Duarte enfrentó numerosos desafíos, su presidencia es notable por haber iniciado un diálogo que eventualmente llevaría a las negociaciones de paz. Además, su gobierno marcó un aumento en la participación política de diversos sectores, debilitando el monopolio político que los terratenientes habían ejercido durante décadas.

En términos de praxis política, la democracia del país fue apoyada explícitamente por el sector empresarial, al verse éste perjudicado por el impacto del conflicto en la inversión. *De jure*, la democracia salvadoreña permitió la inclusión de partidos no derechistas, aunque era limitada a aquellos partidos que no pretendían subvertir el orden político. *De facto*, sin embargo, las restricciones a movimientos políticos y sociales persistieron, alimentando el conflicto durante la brutal guerra civil de los 80 (Dominguez, 1997, p. 11-13). Un cambio sustancial ocurrió en 1987 cuando, bajo el nombre de Convergencia Democrática, dos fuerzas políticas dentro del proyecto Revolucionario Democrático se unieron al Partido Social Democrático, legalmente registrado.

Este ensanchamiento del espectro político incluyó al MNR, un partido de la Internacional Socialista, marcando un claro avance en la pluralidad política (Alvarez, 2010; Lazo, 1992). Los Acuerdos de Paz de 1992, que marcaron el fin de la guerra civil, fueron fundamentales para la democratización de El Salvador ya que no solo pusieron fin a más de una década de lucha armada, sino que también reformaron la Constitución en 1991, limitando el poder militar, lo cual pasó a ser función de la Corte Suprema. Estos acuerdos llevaron a una reforma profunda de las instituciones militares y establecieron un marco para elecciones

más libres y justas. Además, permitieron una mayor participación de la izquierda política, representada principalmente por el FMLN, en la política formal (Martínez-Uribe, 2013). Además, se creó el Tribunal Supremo Electoral para preservar la alternancia de poder, y se estableció la oficina del Procurador de los Derechos Humanos para monitorear las acciones militares (Martínez-Uribe, 2013, p. 144).

El desarrollo de la democracia en El Salvador se reflejó en varios indicadores internacionales. Por ejemplo, Polity IV señala que una transición ocurrió en 1984, con las elecciones pluralistas, aunque solo en 1991, con el desarrollo del acuerdo de paz, El Salvador se consideró como democracia consolidada. Por su parte, Freedom House consideró a El Salvador un país parcialmente libre entre 1979 y 1997, cambiando su clasificación a "libre" desde 1998 hasta el presente, tanto en derechos políticos como en libertades civiles.

La descripción del proceso y la contribución disciplinar a la luz del caso salvadoreño

La variable de interés en el proceso causal aquí descrito es la implementación de reformas agrarias. Estas reformas, generalmente llevadas a cabo en fases, implican la expropiación de tierras de grandes propietarios y su redistribución a campesinos sin tierra. La creación de instituciones que lleven a cabo la implementación de la política, como el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), es un mecanismo causal que facilita la implementación y la sostenibilidad de la redistribución.

Por su parte, las variables explicativas son, esencialmente, dos: el conflicto intra-élite y el proceso de modernización económica, este último acompañado de una mayor apertura democrática. El conflicto intra-élite se manifiesta principalmente entre terratenientes y empresarios industriales y de servicios. Los motivos de estos conflictos radican en la redistribución de poder y recursos, impulsada por los procesos de modernización económica. A medida que las economías se diversifican y se industrializan, los terratenientes pierden su influencia tradicional frente a sectores empresariales emergentes. Este desplazamiento de poder crea tensiones significativas dentro de la elite económica, lo que puede generar oportunidades políticas para la implementación de reformas que

debiliten a la clase terrateniente. La segunda variable es la modernización misma, que está acompañada de un contexto de apertura democrática y transición política. La modernización económica implica una diversificación de la economía, reduciendo la dependencia del sector agrícola y redistribuyendo el poder económico hacia los sectores industriales y de servicios. Simultáneamente, la democratización moviliza a las masas y crea un entorno político en el que las demandas populares por la redistribución de recursos tienen más probabilidades de ser atendidas por sectores políticos emergentes.

El proceso causal, en el que se manifiestan varios factores de interés, se interconecta también a partir de dos mecanismos. El primero es la reducción de influencia de los terratenientes debido al conflicto armado y la guerra, lo cual disminuye la capacidad de los terratenientes para mantener su poder político y para que se abran espacios que les permitan crear alianzas con otros actores relevantes, como las élites políticas que empiezan a respaldar a los empresarios urbanos. Por otro lado, los conflictos intra-élite generan ventanas de oportunidad para la implementación de políticas redistributivas, ya que las élites dominantes se debilitan y son menos capaces de resistir a cambios significativos.

Este estudio se sitúa en la confluencia de diversas disciplinas dentro de las ciencias sociales, ofreciendo contribuciones valiosas desde la ciencia política, la sociología y la economía política. Al examinar las dinámicas de conflicto y redistribución en El Salvador, este trabajo profundiza en cómo las élites modelan las trayectorias políticas y económicas. Desde la ciencia política, se destaca la influencia de la fragmentación de élites en la estabilidad política y los procesos de democratización, explorando cómo los conflictos entre diferentes fracciones, como los terratenientes y la burguesía emergente, pueden crear oportunidades para reformas políticas y económicas significativas. Además, se analiza la interacción entre la democratización y la implementación de políticas redistributivas, proporcionando un entendimiento más profundo de cómo las transiciones políticas pueden ser aprovechadas para implementar cambios socioeconómicos en contextos de intensa desigualdad.

Este trabajo no solo ilustra la complejidad de las dinámicas políticas y sociales en El Salvador, sino que también proporciona un marco teórico y empírico que puede ser aplicado a otros casos en Latinoamérica y más allá. Al hacerlo, amplía nuestra comprensión

de las intersecciones entre economía, política y sociedad, y cómo estas son configuradas en parte por las relaciones entre las élites y los conflictos entre ellas con sectores menos aventajados. Este enfoque enriquece la literatura existente y ofrece nuevas perspectivas sobre los mecanismos subyacentes que influyen el cambio político y social en las sociedades modernas.

Conclusiones

El estudio de los conflictos entre las élites terratenientes y empresariales en El Salvador ofrece una ventana hacia la comprensión de las complejas interacciones que configuran las políticas de redistribución de tierras y los procesos de democratización. A través de la revisión histórica y el análisis del caso salvadoreño entre 1970 y 1990, este artículo ha explorado cómo los conflictos intra-élite no solo influyen en la configuración política y económica, sino que también abren caminos para reformas agrarias significativas en momentos críticos de transición política.

Los hallazgos de este estudio destacan que las tensiones y rivalidades dentro de las élites pueden actuar como catalizadores para cambios estructurales, particularmente en contextos de apertura democrática. En el caso de El Salvador, las fricciones entre las élites tradicionales y las emergentes facilitaron la implementación de políticas redistributivas que, aunque imperfectas, contribuyeron a una reconfiguración del paisaje agrario y económico del país. Estas dinámicas subrayan la importancia de considerar los factores internos de poder y los intereses económicos al evaluar los procesos de reforma agraria y democratización. Este trabajo también que los conflictos entre las élites, lejos de ser meros enfrentamientos aislados, tienen consecuencias importantes en las luchas por la equidad y la justicia social en la sociedad.

Referencias

- Artiga-González, A. (2015). *El sistema político salvadoreño*. Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.
- Baloyra, E. (1982). *El Salvador in Transition*. The University of North Carolina Press.
- Bates, R. (1997). *Open-Economy Politics. The Political Economy of the World Coffee Trade*. Princeton University Press.
- Bennett, A., & Checkel, J. T. (2014). Preface. In A. Bennett & J. T. Checkel (Eds.), *Process Tracing*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139858472>
- Bulmer-Thomas, V. (1987). *The Political Economy of Central America since 1920*. Cambridge University Press.
- Cardenal, A. S. (1996). *La democracia y la tierra. Cambio político en El Salvador*. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- CEPAL. (1956). *La integración económica de Centroamérica: su evolución y perspectivas*. Naciones Unidas.
- Collier, D. (2011). Understanding Process Tracing. *PS: Political Science & Politics*, 44(4), 823–830. <https://doi.org/10.1017/S1049096511001429>
- Dominguez, J. (1997). Democratic Transitions in Central America and Panama. In J. Domínguez & M. Lindenberg (Eds.), *Democratic Transitions in Central America*. University Press of Florida.
- Dunkerley, J. (1994). *The Pacification of Central America. Political Change in the Isthmus, 1987-93*. Verso.
- George, A., & Bennett, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. MIT press.
- Goitía, A. (1991). Reforma Agraria con orientación de Mercado. In R. Ruben & G. Van Oord (Eds.), *Más allá del ajuste. La contribución europea al desarrollo democrático y duradero de las economías centroamericanas*. Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI.
- González, L. A., & Romano Martínez, L. E. (1999). Reforma agraria y cooperativismo en El Salvador: antecedentes y perspectivas (1970-1996). *Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 68, 175–206. <https://doi.org/10.5377/realidad.v0i68.4835>
- Gordon, S. (1989). *Crisis y Política en El Salvador*. Siglo XXI Editores.
- Haggerty, R. (1990). Government and Politics. In R. Haggerty (Ed.), *El Salvador. A country study*. The Library of Congress.
- Huntington, S. (1991). *El orden político en las sociedades en cambio*. Paidós.

- International Coffee Organization. (2021). *Statistics. Historical Data on the Global Coffee Trade*. International Coffee Organization.
- Lipset, S. M. (1990). *Consensus and conflict. Essays in political sociology*. Transaction Publisher.
- López Pérez, C. R. (1984). *Industrialización y urbanización en El Salvador, 1969-1979*. UCA Editores.
- Martínez Vallejo, D. F. (2021). *The Threat of Redistribution under Democracy*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Martínez-Peñate, Ó. (2003). *El Salvador, sociología general*. Editorial Nuevo Enfoque.
- Martínez-Uribe, G. A. (2018). *Democratización y control civil de las Fuerzas Armadas en El Salvador (1992-2012)*. Universitat Autònoma de Barcelona.
- Menjívar, R. (1986). *Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño*. UCA Editores.
- Montgomery, T. S. (1982). *Revolution in El Salvador: origins and evolution*. Westview Press.
- Moore, B. (2002). *Los orígenes sociales de la democracia y la dictadura*. Península.
- Paige, J. (1997). *Coffee and Power: Revolution and the Rise of Democracy in Central America*. Harvard University Press.
- Pastor, M., & Boyce, J. K. (2000). El Salvador: Economic Disparities, External Intervention, and Civil Conflict. In W. Nafziger, F. Stewart, & R. Vayrynen (Eds.), *War, Hunger, and Displacement: Volume 2* (pp. 365–400). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198297406.003.0012>
- Pratt, L., & Pérez, J. M. (1997). Industria Azucarera en El Salvador: Análisis de Sostenibilidad. *Documentos CEN*, 631, 2–11.
- Ricardo, D. (1817). *On the principles of political economy and taxation*. John Murray.
- Robinson, W. (2003). *Transnational Conflicts. Central America, Social Change and Globalization*. Verso.
- Rostow, W. W. (1960). *The stages of economic growth. A non communist manifesto*. Cambridge University Press.
- Schulte-Mecklenbeck, M., Johnson, J. G., Böckenholt, U., Goldstein, D. G., Russo, J. E., Sullivan, N. J., & Willemsen, M. C. (2017). Process-Tracing Methods in Decision Making: On Growing Up in the 70s. *Current Directions in Psychological Science*, 26(5), 442–450.
<https://doi.org/10.1177/0963721417708229>
- Schumpeter, J. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers.
- Segovia, A. (2002). *Transformación estructural y reforma económica en El Salvador: El funcionamiento económico de los noventa y sus efectos sobre el crecimiento, la pobreza y la distribución del ingreso*. F & G Editores.
- Smith, M. (2001). *Transnational Urbanism: Locating Globalization*. Wiley.

- Spalding, R. (2014). *Contesting Trade in Central America: Market Reforms and Resistance*. University of Texas Press.
- Stanley, W. (1996). *The Protection Racket State. Elite Politics, Military Extortion, and Civil War in El Salvador*. Temple University Press.
- Thome, J. (1984). Reforma Agraria en El Salvador. *Boletín de Ciencias Económicas y Sociales*, 4, 235–252.
- Torres Rivas, E. (2018). *Repression and Resistance: The Struggle for Democracy in Central America*. Westview Press.
- Vásquez, F. (1961). *Acción y Pensamiento Económico de América Latina*. Monteverde.
- Velázquez Carrillo, C. (2012). La evolución del Estado en El Salvador durante el siglo XX: el giro neoliberal y las continuidades clasistas. In M. Thwaites (Ed.), *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas*. CLACSO.
- White, C. (2009). *The History of El Salvado*. Greenwood.
- Wood, E. (2000). *Forging Democracy from Below: Insurgent Transitions in South Africa and El Salvador*. Cambridge University Press.
- Wood, E. (2003). *Insurgent collective action and civil war in El Salvador*. Cambridge University Press.